

Región Norte

Costa Rica en lucha contra una transnacional, ¿acumula el movimiento social para derrotar el TLC?

Ariane Grau Crespo*

** Coordinadora
del Área de Incidencia
en la Asociación Servicios
de Promoción Laboral
(ASEPROLA) Centroamérica,
Sede Costa Rica.*

En la última semana de agosto de 2004 vivimos en Costa Rica una jornada de protestas, manifestaciones y movilizaciones que tuvieron como motor de arranque la lucha contra la empresa transnacional española RITEVE, pero que fue sumando no sólo causas sino también sectores hasta convertirse en una gran movilización nacional que ha vuelto a situar al país en la mirada optimista de los movimientos sociales que luchan contra el poderío imponente de las grandes transnacionales en todo el continente.

Las protestas terminaron con un acuerdo entre el Movimiento Cívico Nacional, que encabezó la lucha inicial, y representantes del gobierno. La reacción de la élite política del país ha sido inmediata, y de alguna forma "sorpresiva". El resultado parcial, al día de hoy, es un clima de ilegitimidad e inestabilidad del bloque político en el poder que ha impulsado las medidas neoliberales de los últimos años.

¿Está el movimiento social costarricense en mejor capacidad para canalizar estos resultados hacia una lucha más articulada de oposición al modelo capitalista neoliberal y sus instrumentos de dominación? ¿Cómo se inserta esta lucha en el proceso de resistencia de las organizaciones sociales y populares en Costa Rica y la región contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos? Intentemos aportar algunos elementos que nos permitan debatir sobre estas preguntas, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de resistencia que continúan. Para ello haremos una reseña comentada de los hechos principales, es decir, la jornada de movilizaciones, el acuerdo alcanzado y los hechos posteriores, y en base a estos haremos algunas reflexiones valorativas finales.

La jornada de movilizaciones

El lunes 23 de agosto miles de transportistas, principalmente choferes de camiones de carga pesada, conocidos como *trailers*, salieron a la calle en una manifestación de protesta llamada "Marcha Tortuga", que consistió en el avance de los camiones a muy baja velocidad por las vías principales de entrada a San José y otras calles internas de la capital. El efecto inmediato fue la obstrucción del paso de otros vehículos que transportaban personas y mercancías, iniciando lo que sería en días posteriores una crisis del transporte y la economía del país. Acompañaron a los *trailereros* algunos taxistas organizados y empleados/as del sector público, representados fundamentalmente por la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pequeños empresarios de talleres nacionales agrupados en la Asociación de Talleres Integrales Costarricense (ATICOS), y otras organizaciones sociales quienes se aglutinaron bajo el nombre de Movimiento Cívico Nacional.

La demanda principal de este Movimiento fue la protesta en contra de la empresa transnacional española RITEVE, que goza de monopolio privado para realizar la revisión técnica vehicular, requisito obligatorio que debe cumplir cada año todo vehículo para poder circular en el país. Es importante situar los antecedentes de esta lucha. En el año 2002, cuando se concedió el monopolio a esta empresa, se presentaron varias protestas en el país que terminaron con duras represiones, detenciones, y finalmente la imposición por parte del gobierno de la autorización a la transnacional para que operara con carácter exclusivo en Costa Rica. Desde ese momento han sido afectados muchos pequeños talleres mecánicos nacionales que antes tenían la posibilidad de hacer estas revisiones, e igualmente han sido afectadas muchas personas de escasos recursos económicos para quienes su carro es el medio de trabajo, y del cual depende por lo tanto el sustento familiar, quienes han denunciado que no pueden cumplir con los altos parámetros de RITEVE pues estos están muy cercanos a los estándares europeos y poco adecuados a

“La respuesta popular es evidente: unidad en la resistencia frente al gobierno que representa la clase político-empresarial del país y protege a las transnacionales a cualquier costo, que promueve medidas que van cada vez más en detrimento de la calidad de vida del pueblo trabajador y que hacen de Costa Rica un país cada vez más desigual, y que además reprime las acciones que cuestionan y denuncian este modelo de ‘desarrollo’”

las condiciones reales de desarrollo e infraestructura costarricenses, que el gobierno no garantiza resolver. También durante este período se han denunciado incumplimientos en la prestación de servicios que realiza la empresa, e incluso actos de corrupción. Toda esta experiencia le da hoy mayor fuerza y vida a esta lucha, que se retoma dos años después, contra este monopolio privado de carácter inconstitucional¹.

A diferencia de lo sucedido con la lucha de 2002, que fue muy específica y de cierta forma aislada y poco articulada a otros problemas nacionales, este movimiento de protesta situó desde el primer momento dos demandas más: la necesidad de un aumento salarial adicional al decretado por el gobierno para los/as empleados y empleadas del sector público, y el pronunciamiento en contra de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC).

Sin duda alguna las consignas de este movimiento son compartidas por la gran mayoría de las organizaciones sociales y populares del país. Tanto la inconformidad por RITEVE como las consecuencias del alto costo de la vida provocado por las medidas económicas neoliberales de los últimos gobiernos y las implicaciones que tendría el TLC si se llegara a firmar son preocupaciones del pueblo costarricense que se han expresado en otros momentos en diversas manifestaciones de protesta. De ahí que, aun sin tener una participación activa en los primeros días, la mayoría de los gremios sindicales y otras organizaciones sociales y populares expresaron de muy diversas formas su apoyo solidario al Movimiento. Igualmente, de forma individual muchas personas de las comunidades donde estaban localizados los principales bloqueos de calle llegaron a ofrecer su ayuda con comida, agua, café y cobijas para los camioneros.

Este apoyo solidario de los dos primeros días fue transformándose en muy poco tiempo en la integración de las organizaciones sindicales, sociales y populares, comunida-

des y estudiantes, a un movimiento popular que tomaba cada día mas fuerza y prendía en distintos puntos de todo el territorio nacional. Además de las coincidencias políticas con las principales demandas del Movimiento Cívico Nacional, hubo un hecho que sumó una razón más para salir a la calle a participar directamente de las protestas: la actitud represiva del gobierno y las acciones de la madrugada del 25 de agosto.

En la segunda noche de esta jornada de protestas, el presidente de la República, Abel Pacheco, anunció que usaría todas las fuerzas de que dispone para “poner orden en el país”. Estas fuerzas fueron demostradas en la madrugada con la llegada de los policías antimotines a los principales puntos de bloqueo de los camioneros, que fueron despertados por los golpes, por el ruido de los parabrisas quebrados que les caían encima o por los gases lacrimógenos lanzados al interior de las cabinas de los camiones. Estas imágenes de violencia policial, transmitidas por la Televisión Nacional, resaltaron y visibilizaron una vez más todas las fuerzas de que dispone y que está dispuesto a utilizar un gobierno neoliberal para reprimir cualquier acto de disidencia al “desorden” que han venido imponiendo de “forma pacífica” desde el gabinete. La respuesta popular es evidente: unidad en la resistencia frente al gobierno que representa la clase político-empresarial del país y protege a las transnacionales a cualquier costo, que promueve medidas que van cada vez más en detrimento de la calidad de vida del pueblo trabajador y que hacen de Costa Rica un país cada vez más desigual, y que además reprime las acciones que cuestionan y denuncian este modelo de “desarrollo”.

El 26 de agosto fue un día clave en esta lucha. Con muy poco tiempo para convocar, las principales redes de coordinación ya existentes en el país se pusieron de acuerdo para hacer un llamado unitario de paro de labores y participar en una marcha hacia la Asamblea Legislativa. Ya no era sólo el Movimiento Cívico Nacional quien convocaba, ni los transportistas los principales protagonistas. Esta era ya una lucha del pueblo. Se mantuvieron las demandas principales, a las cuales se sumaron la exigencia de libertad para los detenidos en los bloqueos y la devolución de los camiones confiscados. Cada organización, grupo, comunidad que convocaba sumaba también otras demandas. Se calcularon unas 8 mil personas en la marcha de San José, además de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que bloquearon un paso principal en las cercanías de la misma, y se mantuvieron los bloqueos principales en ciudades como San Ramón, Heredia, Limón y otras. Fue importante este día porque se logró demostrar ante el gobierno y la clase política empresarial del país la voluntad de un movimiento social y popular con demandas diversas y con referentes en casi todo el territorio nacional de articularse en un proceso de lucha coordinado y plantear demandas conjuntas.

Los bloqueos, paros, manifestaciones de distinto tipo no cesaron hasta completar una semana intensa de manifestaciones que culminó con la firma del acuerdo con el gobier-

no el 31 de agosto. La jornada de movilización cerró así con un acuerdo que más adelante analizaremos. Pero más allá del acuerdo, es importante resaltar algunos elementos del proceso organizativo como tal. Primeramente, el involucramiento paulatino de organizaciones y sectores reafirma el carácter multisectorial de las luchas sociales, lo cual es expresión del efecto multidimensional que tienen las políticas neoliberales contra las cuales se lucha. Cada vez resulta más impensable apostar a luchas sectoriales o gremiales aisladas, y aun cuando es necesario avanzar más, es evidente que la conciencia del movimiento social y popular costarricense ha ido en crecimiento en este sentido.

Por otra parte, se puso en evidencia una madurez de las diversas organizaciones al mostrar la capacidad para sumarse a una lucha a la cual no fueron invitadas a participar en la convocatoria ni a definir el proceso inicial, ni las demandas y consignas planteadas. Si bien las organizaciones convocantes no consensuaron el llamado a esta jornada con las principales redes y espacios de coordinación nacional existentes, ya sea sindicales, como el Consejo de Unidad Sindical y Magisterial (CUSIMA), o multisectoriales, como el Comité Nacional de Enlace (CNE), estos últimos supieron dar primeramente las muestras de solidaridad y luego sumarse a la lucha y autoconvocar en defensa de los mismos intereses y frente a un enemigo común.

Estas y otras organizaciones que asumieron y participaron en este proceso hicieron varios llamados a conformar un Comité Único de Lucha que permitiera no sólo coordinar la participación conjunta en las acciones, sino participar en y coordinar de forma conjunta la conducción política del proceso, que aparente y formalmente se seguía presentando bajo responsabilidad del Movimiento Cívico Nacional, pero en la práctica no existía, pues el estallido de la protesta social complejizó la organización al abarcar sectores y espacios que no reconocen a las dirigencias del recién conformado Movimiento como sus representantes, ni actuaron bajo su conducción política. Lamentablemente este Comité Unitario no se conformó, lo cual es uno de los vacíos más importantes de estas jornadas, pero el solo hecho de que fuera planteado por múltiples organizaciones evidencia también una demanda interna que el movimiento social tiene el reto de resolver.

Haber logrado esta coordinación hubiera sido un salto cualitativo en cuanto al nivel de participación real y democrática al interior de los movimientos sociales, que habría permitido una orientación estratégica de las acciones. A pesar de esto, sí es válido señalar aspectos positivos que suman en esta dirección. Durante los días de protesta se evidenciaron prácticas democráticas que, si bien no fueron generalizadas, deben ser señaladas como ejemplo para replicar y consolidar en las luchas sociales de las organizaciones. Las reuniones abiertas de balance y evaluación al final de cada día para definir las acciones del día siguiente de las distintas organizaciones estudiantiles de la UCR, el

espacio de coordinación convocado diariamente por el CNE al que asistían decenas de representantes de organizaciones populares, o las Asambleas Nacionales a las que convocaron en medio del proceso organizaciones magisteriales como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), deberían incorporarse como prácticas cotidianas en estos procesos de lucha.

El acuerdo y las reacciones posteriores

Son diversas y contradictorias las opiniones de los sectores participantes en este proceso respecto a los alcances y significado del acuerdo logrado. Sería apresurado emitir una valoración total del mismo, pues en gran parte sus resultados reales dependen del cumplimiento efectivo y seguimiento que se le pueda dar a cada uno de los puntos allí planteados. Sin embargo, sí es posible adelantar algunos criterios a partir del análisis del texto como tal. El acuerdo logra dar una solución momentánea a las principales demandas planteadas en esta jornada de lucha, y abre el espacio para dialogar con el gobierno sobre asuntos de carácter más estructural, con lo cual se visibiliza en el texto que el descontento popular expresado en estos días requiere para su solución una revisión más cuidadosa y profunda de la política económica que se ha venido implementando. No exagero mi optimismo, ni pretendo que se interprete de forma triunfalista, pero al menos formalmente el acuerdo no cierra de forma conformista con una “concesión” del gobierno que ignora las causas principales del problema al que se le pretende dar solución.

En cuanto a la denuncia contra la transnacional RITEVE, se acordó una revisión del contrato que le otorga el carácter de monopolio a la empresa a través de una consulta a la Contraloría de la República, además del compromiso del gobierno de renegociar con la empresa la cláusula del contrato que establece la legalidad de esta prestación exclusiva del servicio. Ciertamente nada se garantiza aún

“... las renunciaciones de ministros y funcionarios [...] demuestran la incapacidad del poder político empresarial del país para gobernar en situaciones de conflictividad social [...] el núcleo fuerte que ha sostenido durante los últimos años la orientación del proyecto económico neoliberal del gobierno está debilitado: no derrotado, pero sí en una crisis a la cual ha contribuido la demostración de protesta popular”

con estas letras para que efectivamente se elimine el monopolio contra el cual protestaron las y los costarricenses en días pasados. Pero el logro del acuerdo es sin duda obligar al gobierno a poner en cuestión la legalidad de una empresa transnacional en el país. En momentos en los que la política económica del país apuesta cada vez más a un modelo de desarrollo y de inserción global asentado en el “libre comercio”, el cual se basa en la legalización y protección total del poder y los intereses de las grandes transnacionales mientras se limita la capacidad del Estado de regular su funcionamiento, este simple acuerdo de revisión hace un alto en el camino. Sería exagerado decir que revierte o debilita el planteamiento neoliberal del gobierno, pero sí demuestra una vez más que con presión popular al menos los cuestionamientos tienen cabida. El reto ahora está en la capacidad de monitoreo y seguimiento a estos acuerdos para que efectivamente se cumplan.

En este mismo sentido, el aumento salarial del 0,5% para las personas trabajadoras del sector público, si bien no resuelve el escaso poder adquisitivo de los salarios en relación con el alto costo de la vida, representa un aumento del 4,5% respecto del decretado autoritariamente por el gobierno, que parecía ser el que iba a ejecutarse durante todo el segundo semestre de este año. Es decir, se logró torcer una decisión que parecía inamovible. Este hecho, más allá del aumento concreto del salario de cada una de las personas trabajadoras, genera el optimismo de que las decisiones de los gobiernos no son inalterables y que con organización y movilización es posible ganar las luchas sociales.

Una vez firmado el acuerdo, las movilizaciones se detuvieron en todo el país. Inmediatamente después se generó una secuencia de “renuncias” de ministros y funcionarios que le ha dado otro aire victorioso a las protestas y manifestaciones populares. Comenzó quien fuera el ministro de Hacienda, Alberto Dent, a quien en días posteriores siguió la viceministra Silena Alvarado. Renunció también Ronulfo Jiménez, quien era el coordinador del Consejo Económico. El Ministerio de Transportes también quedó descabezado con la salida del ministro Javier Chávez, sumándose Ignacio Sánchez, entonces director de Policía de Tránsito. El hasta ese momento ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, también se vio impulsado a salir de su puesto.

Pero el broche de oro de esta ola de renuncias lo puso la salida de quienes han sido las figuras principales de este gobierno por el papel que han jugado en las negociaciones del TLC: el ahora ex-ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos, la viceministra Gabriela Llobet que también fue la negociadora por Costa Rica de los temas laboral y ambiental en el TLC, y la jefa del Equipo de Negociación, Anabelle González.

Sin duda alguna, todas estas “renuncias” fueron precipitadas por los acontecimientos de los últimos días y demuestran la incapacidad del poder político empresarial del país para

gobernar en situaciones de conflictividad social, consecuencia de las mismas políticas neoliberales que han recetado y aplicado. En este momento, el núcleo fuerte que ha sostenido durante los últimos años la orientación del proyecto económico neoliberal del gobierno está debilitado: no derrotado, pero sí en una crisis a la cual ha contribuido la demostración de protesta popular.

Reflexión final

Esta jornada de protesta y sus resultados posteriores, analizados en el contexto de un proceso de acumulación de fuerzas en la lucha para impedir la aprobación del TLC, que es el objetivo principal de los movimientos sociales de Centroamérica hoy, son un eslabón que indudablemente aportará si se logra potenciar y articular coherentemente con un proceso que lleva más de dos años de sensibilización, concientización, educación política y coordinación organizativa en lo nacional y lo regional.

La visibilización de la consigna de rechazo al TLC que estuvo presente en todas las manifestaciones, por pequeña que fuera, mostraba un telón de fondo a las demandas más concretas, y le impregna un carácter de continuidad a la lucha. Asimismo, el tema principal que originó esta jornada, que fue la protesta contra los efectos negativos de una transnacional, acumula en nivel de conciencia de los sectores organizados acerca de los argumentos y razones por los cuales oponerse al TLC. Finalmente, el abandono que hicieron de sus puestos los principales responsables de la negociación del TLC abre una grieta en el bloque de poder que podría ser utilizada por los movimientos en contra del Libre Comercio para demostrar la ilegitimidad de estas políticas y en particular del TLC que impulsaron, negociaron y firmaron y ahora no son capaces de defender.

Sigue siendo un reto para los movimientos sociales actuales, y Costa Rica no es la excepción, cómo articular el carácter heterogéneo, diverso y multisectorial en una propuesta estratégica política común. Es necesario lograr una conducción política que articule los diversos intereses y propuestas sin reproducir los esquemas verticales y autoritarios, pero sin caer en el extremo de la dispersión, el gremialismo o el liderazgo centralizado y protagonístico en sí mismo que no permite articular ni abrir espacios de participación real para la construcción de la unidad. Muchos de estos vicios siguen estando presentes, y esta jornada sirve para hacer la reflexión una vez más desde la práctica misma.

Por último, estos acontecimientos tienen un alcance regional. La lucha contra el TLC no es sólo de Costa Rica, y estas noticias llegan a Centroamérica con signos de optimismo. Para muchos sectores y organizaciones de la región, Costa Rica es un bastión importante en esta lucha. El ejemplo del llamado COMBO 2000, donde se logró parar el intento

de privatización de las telecomunicaciones, sigue estando presente como una de las grandes victorias del movimiento social frente al avance galopante del neoliberalismo en todos los países.

Pasar del intercambio de la noticia a la acción conjunta regional es otro de los retos. En este sentido, el proceso de los Foros Mesoamericanos y en particular el V Foro, celebrado en San Salvador el pasado mes de julio, apunta hacia un avance en la articulación de estrategias regionales contra el libre comercio y el neoliberalismo, y representa un paso importante en la definición conjunta de acciones regionales para impedir la aprobación del TLC con Estados Unidos. Llevar esta conciencia de lucha regional a cada uno de los espacios de resistencia en los países es también una tarea interna para el movimiento social costarricense y en especial para las organizaciones que, como el Encuentro Popular y otras, han tenido la visión de ir trabajando en lo local la construcción de redes nacionales y la articulación a los espacios regionales. Hacer de esta lucha con sus logros y limitaciones un paso de avance en la lucha contra el TLC debe ser la estrategia a seguir.

Nota

1 El artículo 46 de la Constitución Política de la República señala que “son prohibidos los monopolios de carácter particular”.